

gobierno del Estado puso al reo prófugo, Cosme D. Ayala, á disposicion del tribunal superior de justicia, y que para mejor informarse, podia ocurrir el juez de Distrito al de primera instancia de Izamal que practicaba las diligencias respectivas. Visto el pedimento del C. promotor fiscal en favor del amparo que se pretende; la sentencia del juez de Distrito que lo concede y todo lo demas que ver convino.

Considerando: que los procedimientos reclamados del jefe político de Motul, no han sido ni contradichos ni explicados legalmente por esa autoridad, y que en esta virtud, sin afectarse lo que haya dispuesto ó puede disponer la judicial respecto del reclamante, es fundada la violacion de garantías á que se refiere, y justo el amparo que se solicita, con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que se confirma la sentencia del juez de Distrito de Yucatan pronunciada en Mérida á 7 de Agosto último, por la cual declara, que la justicia de la Union ampara y protege á Cosme D. Ayala, contra la órden del prefecto de Motul que lo redujo á prision y lo ha conservado en ella sin sujetarlo á la autoridad judicial, oportunamente.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazón.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar,* secretario.

COMPETENCIA.

Juicio seguido entre el Juzgado 2º de lo civil de México y el de 1ª instancia de Apam, sobre ejecutar la sentencia de remate en el juicio que D. Manuel Madrid sigue contra D. Rafael Piña y Benites, sobre redencion de un capital.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El fiscal dice: que se ha vuelto á suscitar competencia entre el juzgado 2º de lo civil de México y el de 1ª instancia de Apam, para conocer del juicio que D. Manuel Madrid sigue contra D. Rafael Piña y Benites, sobre redencion de un capital que reconoce el rancho de Acopinalco. Sirve ahora de pretexto al juez de Apam, para promover el recurso, la circunstancia de que D. Rafael Piña se ha presentado ante el juzgado de Apam haciendo cesion de bienes. Con este motivo el juez de este lugar dirigió al de México el oficio de 29 de Abril próximo pasado, iniciándole competencia; luego veremos con qué objeto.

Es el caso, que á consecuencia del juicio ejecutivo de que se ha hecho mencion, y del que á pesar de las diversas competencias que para conocer de él, le ha promovido el juez de Apam al de México, reconocida y declarada la jurisdiccion del último por esta Corte Suprema, ha seguido conociendo del juicio hasta el punto de pronunciar sentencia de remate, y dado al efecto el primer pregon; el deudor D. Rafael Piña, se presentó al juez de Apam manifestándole, que habiendo hecho cesion de bienes á favor de sus acreedores, y estando á punto de declararse su buena ó mala formacion, pasara exhorto al juez de México, á fin de que suspendiera la secuela del juicio ejecutivo, hasta tanto se hiciera aquella declaracion.

El juez de Apam accedió á esa solicitud, y con fecha 29 de Abril próximo pasado

remite al de México un oficio, en el que insertando el escrito de Piña, concluye iniciándole desde luego competencia.

Pero atendiendo á ese escrito de Piña, en él pretende que el juez de México suspenda la ejecución de la sentencia de remate que pronunció en el juicio sobre redención del capital que reconoce el rancho de Acopinaco, y se le reclame la competencia para conocer de la ejecución de esa sentencia.

Esta respetable sala recordará, pues no hace mucho tiempo de ello, que el juez de Apam promovió una competencia sobre el mismo punto, y el mismo juicio, y que la resolución de la Corte Suprema le fué adversa; hoy ensaya otro medio, pero con idéntico fin. El juez de Apam afecta creer que por el simple hecho de que D. Rafael Piña se ha presentado diciendo que hace cesión de bienes; por sola esa circunstancia, ya ha variado la naturaleza del juicio ejecutivo que se sigue contra él en México y que está tan adelantado, cuanto que ya pronunciada la sentencia de remate, únicamente se trata ahora de ejecutar y hacer efectiva esa sentencia.

En verdad, causa lástima ver que el juez de Apam y la parte de Piña citen leyes y doctrinas todas verdaderas, todas exactas y admitidas en la práctica, y sin embargo, lejos de apoyar el derecho que pretenden, les resultan contraproducentes, y lo que es aún mas, esa misma ley del Estado de Hidalgo no dice lo que ellos quieren que diga. Solo la ignorancia ó la malicia, pueden causar tal manera de ver é interpretar los textos y las disposiciones mas comunes del derecho. ¡Tiempo es ya de que esta Suprema Corte, consultando su propia dignidad, haga alguna manifestación que indique al juez de Apam y á la parte de Piña, que la lenidad y la indulgencia tambien tienen su hasta aquí, que les marca la temeridad y la injusticia! ¡Cuántos y cuán repetidos no han sido los conflictos jurisdiccionales que á cada paso ha provocado el juzgado de Apam al de México, para conocer del ju-

cio que Madrid sigue contra Piña! Y sin embargo, en todos ellos se ha puesto de relieve el ningún fundamento con que el referido juez del Estado de Hidalgo, ha promovido esos recursos.

Hay mismo, en la presente controversia sucede otro tanto. Para demostrarlo, examinemos la razón en que ahora se funda este juez para inhibir al de México del conocimiento del juicio en cuestión.

Como se ha dicho, se alega la cesión, ó para hablar con mas exactitud la manifestación que Piña ha hecho de hacer cesión de bienes. Con tal motivo, el juez de Apam nos dice lo que ya todos sabemos, á saber: que ese juicio es universal y atractivo; pero aquí es donde precisamente se preocupa la cuestión, y se tergiversan las doctrinas de los autores, se confunde el principio con el fin, la causa con el resultado, los preliminares del juicio con el juicio mismo, y así, ¿qué extraño es que se saquen conclusiones falsas?

En efecto, los autores al ocuparse del tratado sobre concurso de acreedores, dicen que es de cuatro maneras: fijando entre una de estas el que se hace por la cesión de bienes, practida por el deudor en favor de sus acreedores; y al que se da el nombre de concurso voluntario. Luego, explicando esos mismos autores la naturaleza de ese concurso, su objeto en el día, modificado del que tuvo en su origen, la manera de hacerlo y sus efectos, distinguen dos tiempos, ó dos diversos periodos en ese juicio: uno es desde que el deudor se presenta al juez con sus listas de acreedores y de bienes; pidiendo esto á los primeros, y declare á su vez por bien formado el concurso, y el otro que se cuenta desde esta declaración, y concluye con el pago que se hace de los créditos hasta donde alcance el haber del deudor. Estos dos periodos están tan perfectamente marcados y surten tan diversos efectos, que no es posible confundirlos, ni menos aplicar y hacer efectivos en el primero los que solo son propios y exclusivos del segundo.

En el primero: el deudor tiene que entenderse directamente con los acreedores; en el segundo: hecha ya la declaracion de bien formado el concurso, el deudor queda absolutamente libre desde ese momento, por decirlo así; su persona es completamente agena al juicio y solo los acreedores son los que debaten entre ellos sobre la calificación, legitimidad y preferencia de sus respectivos créditos. En el primer caso, mientras no se haya admitido la cesion por los acreedores, el deudor puede arrepentirse de ella y reasumir sus bienes, lo que en manera alguna pudo hacer despues.

Pues bien: sentados estos principios y suponiendo que el deudor llenó todos los requisitos que la ley exige para que la cesion sea buena; el juez que los ha examinado ya, hace la declaracion de estar bien formado el concurso y á contar desde este momento, los autores asientan la siguiente doctrina: "La declaracion de estar bien formado el concurso produce cinco efectos.

"Primero; que durante el juicio el deudor no puede ser reconvenido, ni está obligado á responder en juicio á ninguno de sus acreedores.

"Segundo; que todos deben ocurrir á pedir en el juicio de concurso, que se hace universal, indivisible y atractivo.

"Tercero; que los jueces ante quienes habia demanda, deben sobreseer y remitirlas al del concurso."

Las otras dos no son del caso, y por lo mismo se omiten; pero como se ve, esos efectos no se producen sino que hasta que el juez convencido con conocimiento de causa pronuncia el fallo que sujeta á los acreedores á pasar por la cesion; mas antes en el primer periodo, mientras el deudor practica las diligencias necesarias y llena los requisitos para formar bien su concurso, no disfruta ni disfrutar puede ningun beneficio. Ahora, que la parte de Piña estaba bien convencida de estas doctrinas, lo demuestra el mismo hecho de solo pedir por el momento que el juez de México suspendiera

la ejecucion de la sentencia de remate, hasta tanto se declaraba si la cesion estaba ó no bien formada.

Pues del exámen de los autos que se tienen á la vista aparece, que el juez de Apam no ha hecho semejante declaracion en la cesion de bienes hecha por Piña, que ni ha podido hacerla, porque apenas se están practicando las diligencias preliminares del concurso, y en consecuencia que aun no puede todavía el cedente protender lo amparen los beneficios del concurso ya formado. Piña al hacer tal pretension, se ha colocado en el mismo caso de un acreedor por el solo hecho de haber presentado al juez un documento que en su sentir traía aparejada ejecucion; pretendiera desde luego que su deudor señalara bienes sobre que trabar ejecucion.

No parece, pues, sino que el juez de Apam en el presente negocio, ha querido olvidar de propósito la importante regla del derecho que dice: "Distingue tempora et concordabis jura." Pero de cualquiera manera que esto sea, no es justo que la parte de Madrid recienta hoy y siga acaso resintiendo en lo sucesivo los graves perjuicios á que con tanta frecuencia se le abruma por la interposicion de recursos, que tarde ó temprano, si no se les pone coto, acabará por sucumbir. Esta consideracion, la malicia y temeridad ya notorias en este negocio, la dignidad misma de esta respetable Corte, ponen al fiscal en la penosa, pero imprescindible necesidad de pedir á la sala se sirva hacer una expresa condenacion de costas, haciéndola recaer en la parte de Piña.

Reasumiendo lo que se deja expuesto, el fiscal concluye con las siguientes proposiciones que desde luego sujeta á la aprobacion del tribunal.

Primera; se declara: que el juez 2º de lo civil de México es el competente para ejecutar la sentencia de remate que pronunció en el juicio ejecutivo que D. Manuel Madrid sigue contra D. Rafael Piña y Be-

nites sobre redencion de un capital que reconoce el rancho de Acopinalco.

Segunda; se condena á la parte de Piña y Benites á satisfacer las costas que se hayan causado en esta competencia.

Tercera; devuélvanse las actuaciones al juez de México, con copia de esta sentencia para los efectos legales; remítase copia igual al de Apam para su inteligencia y archívese á su vez el Toca.

México, Agosto treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre once de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia suscitada por el juez de 1ª instancia de Apam en el Estado de México al 2º de lo civil de esta ciudad para ejecutar la sentencia de remate dictada por este en el juicio sobre redencion de un capital que reconoce el rancho de Acopinalco, promovida por el C. Manuel Madrid contra D. Rafael Piña y Benites; los apuntamientos del informe del C. Lic. José Linares Patrono del C. Sebastian Berra apoderado de Madrid, en favor de la jurisdiccion del juez de México; lo pedido por el C. fiscal ante esta 1ª sala, y todo lo demás que convino.

Considerando: que aun cuando Piña se haya presentado ante el juzgado de Apam haciendo cesion de bienes, no estando como no está resuelto todavia si esa cesion se admite ó no, ella no puede bastar para producir la fuerza atractiva que generalmente producen los concursos: que suscitada antes competencia entre dichos jueces sobre conocer de la redencion del capital que reconoce el rancho de Acopinalco, fué dirimida por esta sala en favor del juez 2º de lo civil de México, lo cual aleja la idea de que la últimamente promovida á petición de Piña lo haya sido con buena fé, tanto mas

cuanto que la ley 1ª tit. 27 part. 3ª es bien expresa, y dispone que el juez que dá un juicio debe cumplirlo, y que si el juicio es dado en un lugar y la cosa que se juzga está en otro, el juez del lugar en que está debe cumplir la sentencia entregando la cosa al vencedor, despues de que hubiese recibido carta del que dió la sentencia; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal se declara:

Primero; que el juez 2º de lo civil de México es el competente para ejecutar la sentencia de remate que pronunció en el juicio que D. Manuel Madrid sigue contra D. Rafael Piña y Benites sobre redencion de un capital que reconoce el rancho de Acopinalco.

Segundo: se condena á la parte de Piña y Benites á satisfacer las costas que se han causado en esta competencia.

Tercero; remítanse las actuaciones al juez 2º de lo civil de México, con copia certificada de este auto, remitiéndose copia igual al juez de 1ª instancia de Apam para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México Setiembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.